

ACTA Nº1126 - SESIÓN ORDINARIA 13/2026 - En la ciudad de Montevideo, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiséis, en su sede de la calle Rincón 528, piso 8, se reúne en sesión ordinaria el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, con la participación del Vicepresidente Cr. Alfredo Asti y el Vocal Dr. Luis Calabria. Por Secretaría Leticia Nasso. Abierto el acto siendo las 16:00 horas se pasa a la consideración del orden del día.

Asuntos fuera del orden del día

Los Directores presentes informan:

La supervisora de la oficina de Registro, Archivo y Custodia de Declaraciones Juradas nos informa que quedó habilitado el ingreso desde JUTEP al sistema de declaraciones juradas, lo que posibilita convocar nuevamente a la escribana Patricia Mena para el día lunes próximo para finalizar el trámite del expediente 2026-34-1-0000130 y de da destrucción de las declaraciones juradas en medios electrónicos con más de 10 años de antigüedad.

A solicitud del Director Vocal Dr. Luis Calabria

1)Se propone la elaboración de un Protocolo de Salud Laboral, Convivencia Institucional y Prevención de Situaciones de Acoso.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el pasado 23 de abril se desarrolló la actividad “Salud mental laboral: entre la individualidad y lo organizacional”, convocada por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Allí participó el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Juan Castillo. En La oportunidad sostuvo que “la seguridad y salud en el trabajo” es un “área

3911

que -recordó- es reconocida como un derecho fundamental por la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, afirmó que promover entornos laborales seguros y saludables constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, empleadores y trabajadores”.

El ministro también destacó “la necesidad de abordar problemáticas como la violencia y el acoso laboral desde una perspectiva de derechos humanos, subrayando que se trata de aspectos inherentes a la dignidad de las personas”.

Según la nota publicada en el sitio web de la <https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/salud-mental-laboral-intercambio-sensibilizacion-para-entornos-trabajo> el ministro también hizo referencia a la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Compromiso por la Vida, la Seguridad y la Salud en el Trabajo, como marcos que orientan las acciones del MTSS en la prevención de riesgos laborales. En ese contexto, destacó la importancia de identificar y evaluar riesgos no solo físicos, químicos o biológicos, sino también aquellos de carácter psicosocial.

A su vez, la subdirectora general de la Inspección General del Trabajo, Andrea Bouret, el viernes 24 de abril en San José, durante una jornada por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada en la Plaza 4 de octubre, lanzó una advertencia sobre los riesgos psicosociales en el ámbito laboral. Bouret señaló que desde 2014 el decreto 127 exige tener una evaluación de riesgos en todas las empresas con más de cinco trabajadores. Sin embargo, advirtió que en el imaginario colectivo se cree que esta evaluación es solamente sobre los riesgos físicos, químicos, biológicos o ergonómicos, aludiendo hay que incluir los riesgos de psicosociales. Sobre el punto agregó

que "los riesgos psicosociales no te matan en el momento, como caer de la altura, por ejemplo, pero sí te va matando día a día", según reporta el portal:

<https://www.radio41.com/index.php/columnistas-de-segun-como-se-mire/item/16272-vengo-a-hacer-la-denuncia-antes-de-decidir-suicidarme-inspeccion-del-trabajo-alerta-sobre-riesgos-psicosociales>.

Agregó que, "tenemos que trabajar en prevención, no podemos naturalizar ir a trabajar todos los días a un ambiente hostil, a un ambiente donde no te reconocen tu trabajo, donde hay un acoso por tu condición sexual o por tu raza o tu religión".

En esa línea es que se propone que la JUTEP, al igual que lo han hecho otros organismos y los impulsos institucionales de gobierno, aborde la temática y genere normativa preventiva sobre temas tan sensibles.

Se resuelve:

Mantener hasta integración completa del Directorio.

2) En relación a los fundamentos del Director Vocal en Acta 1123, Sesión 10/2026 (resolución 1041/2023)

Constancia del Director Vocal en relación con la precisión formulada por el Director Vicepresidente en Acta 10 correspondiente a la sesión del 9 de abril.

Ante la constancia formulada por el señor Director Vicepresidente respecto de las consideraciones realizadas por este Director Vocal (en ocasión de la respuesta al pedido de informes del señor Representante Dr. Pablo Abdala), corresponde efectuar las siguientes precisiones, a efectos de evitar que quede

3913

asentada en actas una interpretación parcial, incompleta o jurídicamente equívoca de los antecedentes citados.

En primer lugar, el señor Director Vicepresidente invoca la Resolución N.º 1041/2023, de 13 de julio de 2023, como supuesto respaldo de la posición de la mayoría del Directorio en relación con el acceso al contenido reservado de las declaraciones juradas. Sin embargo, al citar el numeral III de dicha resolución, omite una parte decisiva de la frase allí contenida.

La resolución no se limita a expresar que “ningún dato es oculto al organismo” como consigna el Vicepresidente es su constancia. La frase continúa y debe leerse en su integridad: “ningún dato es oculto al organismo en una investigación”. Esa continuación no es accidental ni irrelevante. Por el contrario, es jurídicamente determinante.

La expresión “en una investigación” confirma exactamente la posición sostenida por este Director Vocal: el acceso o examen de información patrimonial reservada no puede producirse de manera informal, abierta, discrecional o por la sola voluntad de un integrante del Directorio, sino únicamente dentro de un procedimiento jurídicamente habilitado, con finalidad investigativa, debidamente dispuesto y tramitado conforme a la ley.

La Ley N.º 17.060 utiliza la noción de investigación en un sentido técnico. En particular, su artículo 17 refiere a facultades investigativas de la JUTEP ante la existencia de sospechas fundadas de irregularidades patrimoniales. Solo en el artículo 17 de la mencionada ley se hace uso del concepto “investigación”. Ese lenguaje legal no puede ser vaciado de contenido ni transformado en una autorización genérica para examinar información reservada sin procedimiento previo. En constancias previas he sostenido que las facultades investigativas del

artículo 17 permiten iniciar investigaciones, citar al declarante y requerir documentación o información, pero siempre dentro del procedimiento legal previsto, y no mediante exámenes informales o unilaterales del contenido reservado de las declaraciones juradas.

Por tanto, lejos de debilitar la posición de este Director, la cita completa de la Resolución N.º 1041/2023 la reafirma. Si el propio antecedente invocado por el señor Vicepresidente condiciona la no ocultación de datos al organismo a la existencia de “una investigación”, entonces reconoce, aunque sea implícitamente, que no se trata de un acceso libre, irrestricto o sin un proceso predeterminado.

Y si lo que se realizó fue, en los hechos, una apertura o examen de información con voluntad de investigar, correspondía que tal investigación fuera previamente dispuesta por el Directorio, con las garantías, formalidades y mayorías que el ordenamiento exige. Eso no ocurrió. En consecuencia, la actuación resultó irregular desde el punto de vista procedimental.

Desde el punto de vista interpretativo, corresponde recordar que los artículos 17 a 20 del Código Civil imponen reglas claras para la interpretación de la ley: no debe desatenderse el tenor literal cuando el sentido es claro; las palabras deben entenderse en su sentido natural, legal o técnico según corresponda; y el contexto de la ley debe servir para armonizar sus distintas disposiciones. Aplicadas esas reglas al caso, la expresión “en una investigación” no puede ser suprimida ni tratada como un giro retórico carente de efectos jurídicos. En una materia especialmente sensible, como la reserva de declaraciones juradas, la

3915

interpretación debe ser sistemática, garantista y restrictiva respecto de las excepciones al régimen de reserva.

En términos de argumentación jurídica, el recurso a una cita parcial que omite el segmento normativo determinante, que condiciona su verdadero alcance jurídico, constituye una lectura fragmentaria e incompatible con una interpretación sistemática y de buena fe del acto invocado.

Toda interpretación jurídica válida debe operar sobre el texto completo de la disposición, atendiendo a la correspondencia y armonía de sus partes (art. 20 del Código Civil), y no sobre fragmentos descontextualizados. En el caso, la lectura integral de la resolución invierte el sentido que el Sr. Vicepresidente le atribuye.

En segundo lugar, corresponde dejar constancia de una desprolijidad adicional que confirma las dificultades generadas por el sistema de tramitación y elaboración de actas, impulsado por la mayoría. Se pretende contestar en una sesión de fecha 9 de abril utilizando o refiriendo a un expediente que, según surge de los antecedentes, fue creado el 16 de abril. Esa inconsistencia temporal no es menor. Un expediente creado con posterioridad no puede servir regularmente de sustento documental para una respuesta adoptada con anterioridad.

Esa circunstancia no hace más que confirmar la desprolijidad del sistema generado por la mayoría, en el cual las actas han sido objeto de reelaboraciones posteriores que permiten la aparición de este tipo de inconsistencias. Ello afecta la trazabilidad de las decisiones, debilita la certeza documental del procedimiento y compromete la confiabilidad institucional de los registros.

En todo organismo estatal, según lo establecido en el Decreto 500/91, la precisión documental no es una cuestión secundaria ni meramente formal, es una obligación y, esta obligación cobra especial relevancia y carácter de garantía institucional cuando se trata de un organismo de control.

En el caso de las actas no son simples relatos administrativos, son el soporte de la voluntad del órgano, el registro de sus fundamentos y el documento que permite controlar la regularidad de lo actuado. Por eso, cuando se introducen reelaboraciones, referencias cruzadas temporalmente inconsistentes o citas incompletas de antecedentes, se deteriora la calidad institucional del procedimiento y se afecta la transparencia que debe regir, con mayor razón, en la actuación de la JUTEP.

Por todo lo expuesto, este Director Vocal deja expresa constancia de que la precisión formulada por el señor Director Vicepresidente no desvirtúa la posición oportunamente sostenida, sino que, leída íntegramente, la confirma: el acceso a información patrimonial reservada solo puede justificarse en el marco de una investigación formalmente habilitada, dispuesta por el órgano competente y tramitada conforme al procedimiento legal aplicable. Todo apartamiento de ese marco importa una actuación irregular.

Constancia del Director Vicepresidente Cr. Alfredo Asti

Reiteramos que el artículo 12 bis en su párrafo final es absolutamente claro cuando indica que JUTEP deberá abrir y publicar las declaraciones juradas de

los sujetos obligados que define el artículo (aproximadamente 600 cargos políticos y electivos de mayor categoría).

A nuestro entender no se necesita interpretar que cuando el legislador dice “en estas publicaciones se omitirán por razones de seguridad los datos identificatorios de bienes, derechos y obligaciones” se refiere obvia y solamente a la publicidad de las DDJJ (en mi caso lo reafirmo personalmente teniendo en cuenta la voluntad del legislador que lo propuso, argumentó y votó en el Parlamento en la ley 19.797 que incluyó este artículo en la ley 17.060).

En otros artículos queda claro que una vez abiertas las declaraciones estas serán examinadas por los técnicos del organismo a los efectos de controlar su contenido. Por supuesto que aquí si rige la confidencialidad de funcionario público hacia afuera del organismo.

Respecto de limitar este acceso a los casos de investigación prevista para casos graves en el artículo 17 de la ley, no surge de ninguna disposición legal. El término investigar en sentido amplio, como es el caso que nos ocupa, implica definir un tema, formular hipótesis, recolectar datos y analizar información y eso fue lo que se hizo con la DDJJ del Economista Arim. No tiene nada que ver con los extremos expuestos en el artículo 17 en su numeral 2).

3) En relación al mail recibido de fecha 30 de marzo, con un escrito planteando una posible situación de vulneración a los principios de ética en la función pública y afectación del interés público en situación de cargos de alta dedicación en COMTA TACUAREMBÓ.

Se resuelve:

1)Formar expediente.

2) Comunicar a Transparencia Activa para su cumplimiento.

4. En relación a la consulta recibida por correo electrónico a Secretaría con fecha 27 de abril de la Secretaría de COMTA.

Se resuelve:

Comunicar a transparencia Pasiva a sus efectos.

1. Consideración del Acta de la sesión anterior

1.1- Se da lectura al Acta N°1125, Sesión N°12/2026 de 23 de abril del 2026.

Se resuelve:

Aprobar la referida Acta sin observaciones.

2. Asuntos repartidos por Asesoría Letrada

2.1. Expediente 2026-34-1-0000102 – Solicitud de Acceso a la información pública ID. 9340 [REDACTED]

Se resuelve:

1) Denegar el pedido de acceso a la información formulado por [REDACTED] titular de la cédula de identidad número [REDACTED], al amparo de lo dispuesto por la Ley N°18.381, de 17 de octubre de 2008, en los términos peticionados en su solicitud. Para el caso de requerir información que excede a la respuesta institucional que se otorga en esta oportunidad, deberá formular un nuevo pedido que determine con claridad los extremos que contenga su solicitud.

2) Pase a Transparencia Pasiva a efectos de notificar al solicitante, entregando copia del informe letrado donde figura la información aportada por el Área de Declaraciones Juradas y el análisis jurídico efectuado por Asesoría Letrada.

3) Cumplido, archívese.

(Resolución N°66/2026 en anexo)

2.2- Expediente 2025-34-1-0000177- Denuncia nominada contra el exrector de la Universidad de República, por presunta omisión de información en el contenido de sus declaraciones juradas de bienes e ingresos del 19 junio del 2025 [REDACTED]

Se resuelve:

1) Incorporar al expediente la información faltante que se detalla: cadena de emails entre directores e informe de la Ec. Nerena Bárcena sobre la situación patrimonial del matrimonio Arim-Morales.

2) Dar acceso a las actuaciones del expediente al Ec. Rodrigo Arim.

3) Conceder la nueva vista solicitada.

4) Evacuada la vista, vuelva a Directorio a sus efectos.

Fundamentos del Director Vicepresidente Cr. Alfredo Asti

Coincido en que primero debemos darle vista al Economista Arim de todo lo vinculado en el expediente, incluido el intercambio de mail entre Directores, el informe de la Economista Bárcena y la respuesta de Asesoría letrada fechada el 27 de Abril, contestando la vista de Arim del 27 de febrero.

Sobre las conclusiones del informe de la Asesoría letrada, adelanto mi total rechazo a las mismas y, en particular, a su análisis del articulado de la Ley

N°17.060 desconociendo que las declaraciones de Arim se realizan por artículo 12 bis que dispone que JUTEP **abra** y publique esas declaraciones y que, **por razones de seguridad, solo para el público se omitan datos identificatorios** que claramente no rigen para los funcionarios de JUTEP como se ha aclarado en diversas instancias como, solo por un ejemplo, en la Resolución de Directorio anterior Número 1041 del 13/7/2023.

Es llamativa y preocupante la insistencia de la Asesoría Letrada de proponer recurrir a la investigación del Artículo 17 de la ley previsto para casos graves de alteración u ocultamiento de la información, cuando en este caso la misma está **presentada y aclarada reiteradamente**, y si bien contiene errores, los mismos, de ninguna forma pueden hacer presumir intención de ocultamiento. A lo sumo se le podrá reprochar al sujeto obligado la falta de revisión de su declaración, previo al envío para evitar errores de tipeo o concordancia entre los valores declarados por el mismo bien por parte de ambos cónyuges y el régimen de bienes gananciales que no afecta el patrimonio acumulado del matrimonio Arim [REDACTED]. Creo que sería conveniente para el sistema de DDJJ pedir una declaración completa, eliminando esos errores de tipeo y concordancia de valores del mismo bien.

2.3- Expediente 2025-34-1-0000404 - Oficio 137/2025 de Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos de 2do turno.

Se resuelve:

Mantener a despacho.

3. Expedientes repartidos por Declaraciones Juradas

3.1- Expediente 2024-34-1-0000123 - Antecedentes para la declaración de omisos de funcionarios cesados que deben declaración por cese.

Visto las dificultades en poder realizar las notificaciones correspondientes a los sujetos obligados que cesaron en sus respectivos organismos de origen sin presentar su declaración jurada de cese, se estudiaron soluciones alternativas sin encontrar hasta el momento una solución eficiente,

Se resuelve:

Mantener a despacho.

3.2- Expediente 2026-34-1-0000076- Contratación empresa administradora de personal temporario llamado a compra directa.

Se resuelve:

1)Una vez concluida la tarea de apoyo a la búsqueda y destrucción de declaraciones juradas con más de 10 años de presentadas, encomendar tareas compatibles con su formación y condición de personal tercerizado hasta la finalización del contrato el próximos 5 de junio, que no será renovado.

2) Solicitar a las distintas áreas de la Jutep, eventuales necesidades de personal temporal de las características de las personas contratadas por CONEBAN antes del 6 de mayo.

3)Comuníquese a Administración y Finanzas, Recursos humanos y Declaraciones Juradas a sus efectos.

3)Mantener el expediente en Secretaría a la espera de lo solicitado.

4. Asuntos a conocimiento de los señores Directores

4.1- Nota de solicitud al Directorio de la funcionaria Cecilia Báez de fecha 23 de abril del 2026.

Los directores presentes, el Vicepresidente Cr. Alfredo Asti y el Dr. Luis Calabria coinciden en ampliar las tareas asignadas.

Se resuelve:

1) Mantener a despacho hasta el regreso de la Presidenta Dra. Ana Ferraris.

2) Comunicar a la funcionaria.

Las resoluciones adoptadas en la presente acta forman parte integrante de la misma. No siendo para más, se da por concluida la sesión a la hora 18:00, firmando ambos directores la presente Acta.

Firmado por:

Vicepresidente Cr. Alfredo Asti

Vocal Dr. Luis Calabria